

VENEZUELA: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2019

RESUMEN

Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, pero por más de una década el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario que ejerce un control considerable sobre el poder judicial, el poder ciudadano (que incluye la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo) y los órganos electorales del gobierno, y defiende un poder legislativo ilegítimo que funciona de forma paralela al actual poder legislativo elegido. El 10 de enero finalizó el mandato del expresidente Nicolás Maduro, quien procuró permanecer en el poder sobre la base de su pretendida “victoria” en las elecciones presidenciales de 2018, ampliamente condenadas por no ser ni libres ni imparciales; la Asamblea Nacional elegida democráticamente rechaza ese argumento. El 23 de enero Juan Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, asumió la función de presidente interino de conformidad con las disposiciones de la constitución relativas a los puestos vacantes. El expresidente Maduro, con el apoyo de cientos de miembros de las fuerzas de seguridad cubanas, se negó a ceder el control de los instrumentos de poder del Estado, impidiendo así que el presidente interino Guaidó ejerciera autoridad dentro del país. En las elecciones legislativas de 2015, los partidos políticos de la oposición obtuvieron el control de la supermayoría (dos tercios) de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el régimen anterior de Maduro se sirvió del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para crear la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que declaró a la Asamblea Nacional en situación de desacato, usurpó su función constitucional de legislar y debilitó el principio de separación de poderes establecido en la constitución.

El control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad disminuyó y se politizó intensamente. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), unidad de las fuerzas armadas que depende tanto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa como del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tiene la responsabilidad de mantener el orden público, proteger el exterior de las instalaciones gubernamentales importantes y de las cárceles, efectuar operaciones contra el narcotráfico, vigilar las fronteras y prestar servicios de cumplimiento de la ley en zonas remotas. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz controla el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que lleva a cabo la mayoría de las investigaciones penales, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que recaba información de inteligencia dentro del país y en el exterior, y

es responsable de investigar los casos de corrupción, subversión y tráfico de armas. La policía comprende cuerpos policiales municipales, estatales y nacionales. Los alcaldes y los gobernadores supervisan las fuerzas policiales municipales y estatales. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) depende del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Según su sitio web, el CPNB se concentra ampliamente en la vigilancia del municipio Libertador de Caracas; el patrullaje de las carreteras, las vías ferroviarias y el sistema de metro de la zona de Caracas; y la protección de las misiones diplomáticas. El CPNB mantuvo una presencia mínima en siete de los 23 estados del país.

Entre los problemas importantes de derechos humanos cabe destacar los siguientes: ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, incluidas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del régimen anterior de Maduro, entre ellas los “colectivos” (grupos armados auspiciados por el régimen); desapariciones forzadas; actos de tortura por las fuerzas de seguridad; detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras que ponían en peligro la vida; prisioneros políticos; injerencia ilícita en la privacidad; y falta de independencia judicial. El régimen anterior de Maduro restringió la libertad de expresión y de prensa bloqueando sistemáticamente las señales, interfiriendo en el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio y otros medios de comunicación privados o clausurándolos. La difamación, la incitación y la divulgación de información inexacta fueron delitos susceptibles de cargos penales. El régimen anterior de Maduro utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas y la libertad de reunión. Otros problemas que cabe destacar fueron: la intimidación, el acoso y el abuso de miembros de la Asamblea Nacional, incluida la denegación de las debidas garantías procesales y la inmunidad parlamentaria; la corrupción y la impunidad generalizadas entre las fuerzas de seguridad que responden a Maduro y en otras oficinas nacionales y estatales del régimen, incluidos los niveles más altos; la trata de personas; la violencia contra personas indígenas; y las peores formas de trabajo infantil, que el régimen anterior hizo poco por eliminar.

Hubo denuncias constantes de abuso policial y participación policial en actos de delincuencia, en particular en actividades de grupos ilegalmente armados, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso excesivo de la fuerza. Pero el régimen anterior no adoptó ninguna medida eficaz a nivel nacional, estatal o local para investigar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos y existió impunidad con respecto a dichos abusos. La Defensoría del Pueblo, órgano encargado de proteger los derechos humanos, no

proporcionó información sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal policial y de las fuerzas armadas. Organizaciones no gubernamentales (ONG) indicaron que muchas víctimas no denunciaron delitos violentos a la policía u otras autoridades del régimen por temor a represalias o falta de confianza en la policía. El régimen anterior de Maduro, respaldado por miembros de las fuerzas de seguridad cubanas, se negó a ceder el poder, lo que impidió que el gobierno interino actuara.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria de la vida y otras ejecuciones ilícitas o motivadas por cuestiones políticas

Aunque el régimen anterior de Maduro no presentó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, ONG informaron que las mismas ocurrieron durante todo el año, de manos de cuerpos policiales nacionales, estatales y municipales, así como de miembros de las fuerzas armadas y de “colectivos”, respaldados por el régimen.

Tampoco hubo información oficial disponible sobre el número de funcionarios públicos que fueron enjuiciados o condenados a penas de prisión por su participación en ejecuciones extrajudiciales, que en el caso de los homicidios cometidos por la policía se clasificaban a menudo como “resistencia a la autoridad”.

En julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó de 1.569 ejecuciones a manos de las fuerzas de seguridad realizadas entre enero y mayo, y otras 5.287 ejecuciones en 2018, muchas de las cuales “pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”. El ACNUDH solicitó el desmantelamiento de una de las unidades de seguridad más mortíferas del régimen, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Se trata de una unidad especializada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) creada por el expresidente Maduro en 2017 para disipar las manifestaciones a gran escala en todo el país. Según la ONG Monitor de Víctimas, entre enero y junio las FAES cometieron el 70% de los homicidios en manos de las fuerzas de seguridad que responden a Maduro. Las tácticas de las FAES pusieron en práctica la estrategia nacional del régimen anterior para la lucha contra la delincuencia que comenzó en 2015, denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que se caracterizó por grandes redadas en los barrios efectuadas por cientos de agentes de seguridad.

La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó de al menos seis ejecuciones extrajudiciales durante arrestos de manifestantes en los primeros seis meses del año. Jhonny Godoy fue asesinado el 25 de enero cuando aproximadamente 20 miembros armados del CPNB y las FAES allanaron su domicilio en Caracas para arrestarlo. Godoy había publicado un video que se hizo viral en los medios sociales en el que denunciaba a Maduro en medio de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el 23 de enero. Según las declaraciones de testigos, tras ingresar en el domicilio de Godoy las fuerzas de seguridad del régimen amenazaron y encerraron a su familia en una habitación antes de golpear a Godoy. Acto seguido los agentes de seguridad lo trasladaron al exterior de la casa, donde le dispararon y lo mataron. Las ONG y los grupos de derechos humanos calificaron la muerte de Godoy como un asesinato selectivo en manos de las FAES.

El régimen anterior de Maduro informó de que 388 miembros de las FAES estaban siendo investigados por asesinato y otros delitos cometidos desde 2017. Sin embargo, una investigación del ACNUDH determinó que las investigaciones se vieron obstaculizadas por la negativa a cooperar, la manipulación de pruebas, los retrasos judiciales y el hostigamiento a familiares de las víctimas. Según las ONG, los fiscales promovieron ocasionalmente acciones judiciales contra los responsables de ejecuciones extrajudiciales, pero con frecuencia los enjuiciamientos culminaron en penas leves y las condenas se anularon en la instancia de apelación. En muchos casos el régimen parecía utilizar como chivo expiatorio a funcionarios de niveles bajos, mientras permitía que funcionarios de niveles altos que daban órdenes ilegales permanecieran en sus puestos.

b. Desaparición

En una investigación publicada por el ACNUDH en julio se determinó que algunas de las 135 personas que fueron privadas de libertad arbitrariamente desde 2014 constituían casos de desapariciones forzadas. Un estudio realizado en octubre de 2018 por la ONG Espacio Público y la Universidad Católica Andrés Bello documentó 19 presuntos casos de desaparición por días o semanas hasta que el régimen anterior de Maduro revelara el paradero de los detenidos.

El 26 de abril, agentes del SEBIN detuvieron al diputado de la Asamblea Nacional Gilber Caro. Caro no compareció ante un juez dentro de las primeras 48 horas de su detención, como lo exigía la ley, lo que convirtió su arresto en una desaparición forzada, según las Naciones Unidas. El 31 de mayo el régimen reveló que Caro

estaba detenido en la sede del SEBIN, en Caracas, aunque sus abogados no pudieron verlo. Caro fue liberado el 17 de junio sin explicación pública de los fundamentos que motivaron su detención.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la constitución y la ley prohíben tales prácticas, hubo denuncias fidedignas de tortura y maltrato de detenidos por las fuerzas de seguridad que responden a Maduro. No se informó de ningún caso en que se incriminara a funcionarios del régimen en virtud de la ley.

Durante el año la Defensoría del Pueblo, órgano encargado de proteger los derechos humanos alineado con el régimen, no publicó estadísticas sobre presuntos actos de tortura cometidos por las fuerzas policiales. Varias ONG detallaron casos de tortura y de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” generalizados. Grupos de derechos humanos informaron de que el régimen anterior seguía ejerciendo influencia sobre el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva. No se dieron a conocer datos oficiales sobre las investigaciones, los procesamientos ni las condenas en casos de presunta tortura. La ONG Foro Penal sostuvo que en cientos de casos no se presentaron denuncias a las instituciones del Estado por el temor de las víctimas de sufrir represalias.

Los informes de la prensa y las ONG sobre las golpizas y el trato humillante de los sospechosos durante las detenciones fueron comunes e involucraban a varios organismos de cumplimiento de la ley y a las fuerzas armadas del régimen anterior de Maduro. Durante el año se denunciaron actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Se informó de que autoridades alineadas con el régimen sometieron a detenidos a actos de asfixia, descargas eléctricas, fracturas, suspensión por las extremidades y obligación de pasar horas arrodillados. Detenidos informaron de que las fuerzas de seguridad alineadas con el régimen los trasladaban de centros de detención a casas y otras ubicaciones clandestinas donde se llevaba a cabo el abuso. El trato cruel consistía a menudo en que las autoridades del régimen anterior negaban la atención médica a los presos y los mantenían detenidos durante largos períodos en régimen de aislamiento. Esta última práctica se utilizó sobre todo con los presos políticos. Las ONG detallaron denuncias de detenidos que presuntamente habían sufrido abusos sexuales por parte de las autoridades alineadas con el régimen.

Foro Penal informó sobre casos múltiples de presos políticos a quienes se les negó

el debido tratamiento médico mientras permanecían detenidos por el régimen. También señaló que se dieron casos en que las autoridades del régimen trasladaron a detenidos a un centro médico en que, en lugar de recibir tratamiento médico, fueron interrogados por funcionarios de seguridad. La directora ejecutiva del Instituto Casla para el estudio de América Latina, Tamara Suju, señaló un aumento del uso de la tortura durante el año, con 72 casos nuevos registrados y la detención de cinco familiares de desertores de las fuerzas armadas hasta julio.

El 21 de junio, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó al capitán retirado de la Armada Rafael Acosta Arévalo por presuntamente complotar para derrocar a Maduro. El régimen anterior de Maduro ocultó el paradero de Acosta por una semana antes de llevarlo ante un tribunal militar. En la audiencia del 28 de junio, Acosta apareció en silla de ruedas, sin poder hablar ni ponerse de pie, y mostró signos claros de tortura, según expresó su abogado. Las autoridades transfirieron a Acosta a un hospital militar, donde falleció poco después. La autopsia mostró que Acosta tenía múltiples huesos fracturados, quemaduras y otras lesiones. El 24 de septiembre, dos funcionarios de bajo rango de la GNB fueron condenados a seis años y ocho meses de prisión por homicidio intencional, aunque la ley contra la tortura requiere entre 15 y 25 años de prisión. El 1 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección para la familia de Acosta, debido a presuntos actos de intimidación y acoso por parte del régimen anterior de Maduro.

Condiciones de las cárceles y los centros de detención

Las condiciones en la mayoría de las prisiones fueron duras y potencialmente mortales debido al gran hacinamiento, la escasez de alimentos, condiciones sanitarias y atención médica inadecuadas, actos de violencia sistémica y la infraestructura deficiente. Las pandillas armadas ejercían un control de hecho en algunas cárceles en las que estaban reclusas. Las condiciones eran todavía más graves en centros de detención preventiva, como las cárceles de las comisarías.

Condiciones físicas: de acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), las penitenciarías tenían capacidad para unos 19.000 reclusos y las cárceles de las comisarías para 5.000. La cifra promedio de hacinamiento ascendía al 172% en las penitenciarías y al 415% en las cárceles de las comisarías, aunque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que en algunas cárceles el hacinamiento se encontraba entre el 800% y el 1.200%.

Había dos prisiones para mujeres: una en el estado Miranda y la otra en el estado

Zulia. La ley estipula que en las cárceles mixtas las mujeres deben permanecer en anexos o en bloques separados para mujeres. Una ONG local informó de que los reclusos y las reclusas se entremezclaban. Las fuerzas de seguridad del régimen anterior de Maduro y las autoridades del orden a menudo mantenían a los menores de edad junto con los adultos, aunque existían establecimientos separados. Debido a que las instituciones estaban atestadas, cientos de menores acusados de infracciones se encontraban confinados en centros de detención para jóvenes donde, según se informó, permanecían hacinados en celdas pequeñas e insalubres.

Los centros de detención del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), las cárceles de las comisarías y los centros de detención también estaban atestados, por lo que muchas oficinas de las comisarías se convirtieron en celdas improvisadas. Según se informó, los reclusos se turnaban para dormir en el suelo y en sillas de oficina y las instalaciones sanitarias eran inadecuadas o inexistentes. Un estudio realizado por UVL en 2019 en 203 establecimientos que albergaban a detenidos en régimen de prisión preventiva reveló un hacinamiento del 509%. De acuerdo con un estudio realizado por UVL en 2017, en más del 80% de las instalaciones no se prestaban servicios médicos y no se contaba con espacios de recreación, ni zonas destinadas a las visitas, ni servicio de lavandería. Más del 60% no contaba con agua potable y más del 50% no tenía servicios periódicos de recolección de residuos ni retretes adecuados.

La GNB y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz velan por la seguridad exterior e interior de las cárceles, respectivamente. El régimen anterior de Maduro no brindaba seguridad adecuada en ellas. El OVP estimó que había una insuficiencia del 90% en la dotación de personal de seguridad de las cárceles. La relación era de un guardia por cada 100 reclusos, en vez de uno por cada 10, como recomiendan las normas internacionales. UVL informó de 305 muertes de prisioneros en 2018, de las cuales más de la mitad ocurrieron como consecuencia de actos de violencia, como motines, disputas e intentos de fuga. Asimismo, comunicó que algunos reclusos también sucumbieron ante las condiciones de insalubridad e inseguridad generalizadas que predominaban en las prisiones. El 38% de esas muertes fueron por tuberculosis. El OVP informó de que los regímenes de alimentación inadecuados y la falta de agua potable fueron causas frecuentes de enfermedades estomacales entre los reclusos.

Durante el año, los motines en las prisiones y los centros de detención causaron muertos y heridos entre los reclusos. Por ejemplo, el 24 de mayo se produjo un enfrentamiento entre reclusos y las FAES en una comisaría del estado Portuguesa que dejó un saldo de 30 prisioneros muertos y 19 oficiales de policía heridos.

Medios de comunicación informaron de que los reclusos solicitaron mejores condiciones y derechos de visita en las prisiones, que retenían a más de 500 reclusos en un espacio diseñado para 60. Funcionarios alineados con el régimen describieron el evento como un intento de fuga y una disputa entre pandillas rivales, mientras que las ONG lo calificaron de masacre.

Aún no se ha aplicado la ley de 2016 que limita el uso de teléfonos celulares y de internet dentro de las prisiones, para evitar que los reclusos se sirvan de la tecnología para participar en actividades delictivas.

Un estudio de UVL determinó que casi la mitad de los centros de detención exigieron a los familiares que proporcionaran alimentos, agua y medicamentos para los reclusos debido a la escasez de suministro de alimentos por la administración penitenciaria, y que en el 21% de los centros los guardias cobraron por las visitas de familiares.

Las ONG informaron de que los expedientes de antecedentes de los detenidos no se llevaban adecuadamente y a menudo faltaba información. El régimen anterior restringió la información relativa a las muertes en las cárceles por causa de tuberculosis, infección por el VIH/SIDA y otras enfermedades o por falta de atención médica. Un estudio efectuado por la ONG Acción Solidaria determinó que las normas de las cárceles llevaban al aislamiento de los infectados por el VIH/SIDA, siendo estos alojados en espacios inadecuados, sin alimentos ni atención médica. El OVP informó de una falta generalizada de atención médica, medicamentos, equipos y médicos para los reclusos. A menudo los reclusos tomaban los mismos medicamentos, independientemente de sus síntomas, y las mujeres embarazadas carecían de instalaciones adecuadas para su atención médica.

Administración: el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no respondió a las peticiones realizadas por el OVP, UVL, otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, reclusos o familiares con respecto a los presos o a investigaciones sobre las malas condiciones penitenciarias que llevaron a huelgas de hambre, sublevaciones violentas y masacres.

En general, los presos y los detenidos podían recibir visitas, algunos de ellos con derecho a pasar la noche, pero en algunos casos los funcionarios de las prisiones acosaron o maltrataron a los visitantes. Los funcionarios penitenciarios impusieron restricciones considerables a las visitas de familiares y representación jurídica de los presos políticos. En ocasiones algunos visitantes admitidos eran sometidos a registros sin ropa.

Vigilancia independiente: los observadores de derechos humanos siguieron experimentando retrasos prolongados y restricciones en el acceso a las cárceles y los centros de detención. Más de 300 laicos de la Conferencia Episcopal Venezolana, parte de la Iglesia católica romana, se desempeñaron como voluntarios en 40 cárceles. A pesar de su prohibición de ingreso formal en las cárceles, los laicos visitaban a los presos en los días de visita familiar. En marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja visitó por primera vez desde 2012 dos prisiones civiles y militares en Caracas. Entre marzo y septiembre el ACNUDH realizó seis visitas a centros de detención.

d. Arresto o detención arbitrarios

La constitución prohíbe el arresto o la detención de una persona sin una orden judicial y estipula que el acusado permanezca en libertad durante su enjuiciamiento; no obstante, los jueces y los fiscales a menudo incumplieron esas disposiciones. La ley establece el derecho de las personas de impugnar la legalidad del arresto o la detención ante un tribunal, pero en general el régimen anterior de Maduro no respetó este requisito. Mientras que ONG como Foro Penal, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) señalaban un mínimo de 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias, las autoridades del régimen anterior de Maduro muy rara vez les concedieron los medios formales para presentar sus solicitudes. Las autoridades del régimen realizaban detenciones arbitrarias prolongadas, incluso de extranjeros, sin formular cargos penales.

Procedimientos de arresto y trato de los detenidos

Aunque se requiere una orden judicial para proceder a un arresto, una detención puede ejecutarse sin orden judicial si se sorprende a una persona en flagrante delito o se precisa retener a una persona sospechosa o a un testigo durante una investigación. Con frecuencia la policía detuvo a personas sin orden judicial. La ley estipula que los detenidos comparezcan ante un fiscal en un plazo de 12 horas, y en 48 horas ante un juez, para determinar la legitimidad de la detención; la ley también requiere que el detenido sea informado con prontitud sobre los cargos que se le imputan. El régimen anterior ignoró sistemáticamente estos requisitos.

La ley prevé la libertad bajo fianza, pero no se puede recurrir a ella en caso de ciertos delitos. También se la puede denegar si se captura a una persona en

flagrante delito o un juez determina que el imputado puede huir o entorpecer la investigación. La ley también establece que el detenido tiene el derecho de comunicarse con sus abogados y familiares, pero esta prescripción se incumplió con frecuencia, particularmente con los presos políticos. La constitución también dispone que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados, quienes a su vez tienen el derecho de conocer el paradero del detenido. Una persona acusada de un delito no puede permanecer detenida por un período superior a la pena mínima posible por el delito ni por más de dos años, si este lapso fuera menor, excepto en ciertas circunstancias, como el caso en que el retraso procesal haya sido causado por el imputado. El antiguo régimen ignoró sistemáticamente estos requisitos.

Arresto arbitrario: Foro Penal informó de 2.169 casos de detención arbitraria entre el 1 de enero y el 31 de agosto, la mayoría de los cuales fueron detenidos durante manifestaciones.

El 21 de marzo, agentes del SEBIN arrestaron al jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero, a su guardaespaldas, Luis Alberto Páez y a su chofer, Luis Aguilar. Los medios de comunicación denunciaron las pruebas contradictorias y contrapuestas presentadas por los fiscales, que acusaron a Marrero de conspiración, traición y contrabando de armas. Si es declarado culpable, Marrero enfrentará hasta 30 años de prisión. A finales del año, el caso seguía pendiente. Muchas entidades internacionales, incluido el Grupo de Lima y la Unión Europea, repudiaron el arresto arbitrario de Marrero calificándolo de arresto por motivos políticos.

Detención preventiva: la detención preventiva siguió siendo un enorme problema. Según UVL, aproximadamente el 70% de la población carcelaria se encontraba en detención preventiva. La ONG Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y los Derechos Humanos atribuyó las demoras en los juicios a la escasez de fiscales y de jueces penales.

A pesar de las salvaguardias constitucionales que estipulan el enjuiciamiento en un plazo razonable, ha trascendido que los jueces fijaban las primeras audiencias meses después de los hechos que habían dado lugar a la detención. A menudo los procedimientos se aplazaban o se suspendían por la ausencia de un funcionario del tribunal, como el fiscal, el defensor público o el juez. Los presos informaron a las ONG que la falta de medios de transporte y la desorganización del sistema carcelario reducían su acceso a los tribunales y contribuían a las demoras en los juicios.

Capacidad de un detenido para impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal: las personas detenidas pueden impugnar las causas de su detención, pero a menudo los procedimientos se aplazaban y las audiencias se postergaban, dilatando el enjuiciamiento por años. Con frecuencia los tribunales desconocieron la presunción de inocencia del acusado. A menudo las autoridades no permitieron a los detenidos consultar a un abogado ni acceder a los expedientes de sus casos para interponer recursos. Algunos detenidos permanecieron indefinidamente en libertad condicional o en régimen de arresto domiciliario.

c. Denegación de juicio público imparcial

La constitución establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial del régimen anterior de Maduro careció de independencia y, en general, juzgó a favor del régimen anterior en todos los niveles. Ha habido denuncias fidedignas de corrupción e influencia política en todo el Poder Judicial. Según informes de la Comisión Internacional de Juristas, el 85% de los jueces tenían nombramientos provisionales y el Comité Judicial del TSJ podía destituirlos a voluntad. Los jueces provisionales y temporales, que legalmente tienen los mismos derechos y facultades que los jueces permanentes, supuestamente estaban sujetos a la influencia política para fallar a favor del régimen. Ediluh Guedez Ochoa, jueza de un juzgado de menores del estado Yaracuy, presentó en enero una denuncia en la que afirmaba que había sido presionada para condenar a 11 adolescentes por su participación en una manifestación. Cuando se proponía a desestimar los cargos, el presidente del tribunal regional la presionó para que procediera a la condena y más adelante la jueza recibió amenazas de muerte. Posteriormente, las autoridades la destituyeron del cargo.

Hubo falta general de transparencia y estabilidad en la asignación de las causas a los fiscales de distrito y falta de criterios técnicos en la designación de estos fiscales para las investigaciones penales. Estas carencias obstaculizaron la posibilidad de enjuiciar a los infractores y dieron lugar a una tasa de impunidad de un 90% en los delitos comunes y un porcentaje más elevado en los casos de presuntas violaciones de derechos humanos.

Procedimientos judiciales

La ley establece el derecho a un juicio público e imparcial con procedimientos orales para todas las personas. De acuerdo con la ley, todo imputado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La ley exige que el detenido sea

informado sin demora sobre los cargos que se le imputan, pero según organizaciones de derechos humanos a menudo se desconoció este requisito e, incluso cuando se lo cumplió, fue acompañado de alegaciones dudosas. El acusado tiene derecho a consultar a un abogado. Según la Defensoría del Pueblo, había aproximadamente 1.300 defensores públicos, pero el derecho de los acusados indigentes a contar con un abogado de oficio a menudo no se respetó debido a la escasez de abogados. Con frecuencia los acusados no disponían de servicios de interpretación gratuitos. Algunas ONG ofrecieron abogados de oficio a los imputados.

Los acusados pueden solicitar un mínimo de 30 días y un máximo de 45 días para preparar su defensa. Tienen derecho a interrogar a los testigos de cargo y a convocar a sus propios testigos. La ley estipula que no se puede obligar a los acusados a declarar ni a confesar su culpabilidad. Los acusados y los querellantes tienen derecho de apelación.

Las demoras de los juicios fueron frecuentes. Se permite el juicio en rebeldía en ciertas circunstancias, aunque sus detractores lo tachan de inconstitucional. La ley también estipula que, en ausencia de un abogado defensor, el juicio puede llevarse a cabo con un defensor público designado por el tribunal. La ley confiere discrecionalidad a los jueces para realizar los juicios a puertas cerradas en caso de que un juicio público pudiera llegar a “alterar el curso normal del juicio”.

El 4 de julio, el régimen anterior de Maduro declaró que se otorgaría la libertad completa e incondicional a la jueza María Lourdes Afiuni, pero su liberación aún estaba pendiente al final del año. Las autoridades arrestaron a Afiuni en 2009 sobre la base de acusaciones de corrupción y abuso de autoridad por su decisión de liberar a un empresario que había estado en detención preventiva por un plazo superior al máximo prescrito por la ley. Tras su excarcelación en régimen de arresto domiciliario en 2011, las autoridades alineadas con el régimen limitaron su circulación y sus posibilidades de hablar con la prensa. El 26 de marzo un tribunal condenó a Afiuni a otros cinco años de prisión, decisión que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados calificaron de “acto de represalia”.

La ley estipula que los tribunales municipales se ocupen de los delitos “menos graves”; es decir, los que conllevan penas máximas de prisión de menos de ocho años. Los tribunales municipales pueden aplicar penas que impongan de tres a ocho meses de servicio comunitario. Además de remitir algunos delitos “menos graves” a los tribunales municipales, esta disposición permite que las personas

acusadas de “delitos menores” soliciten a los tribunales la suspensión condicional de su enjuiciamiento, a cambio de su reconocimiento de responsabilidad, el compromiso de indemnizar “de forma material o simbólica”, la prestación de servicios en la comunidad o el cumplimiento de cualquier otra condición impuesta por el tribunal.

La ley establece que los juicios del personal militar acusado de violaciones de derechos humanos después de 1999 se realicen en los tribunales civiles y no en los tribunales militares. Por otra parte, de conformidad con el Código Orgánico de Justicia Militar, se puede someter a juicio en el sistema de justicia militar a la persona que “injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o algunas de sus unidades”. Varias ONG y la CIDH expresaron preocupación respecto de la práctica del régimen anterior de juzgar a los civiles a través del sistema de justicia militar por manifestaciones y otros actos que no son de competencia militar. Según Foro Penal, desde 2014 los tribunales militares han procesado a 848 civiles.

Presos y detenidos políticos

El régimen anterior de Maduro ha utilizado el sistema judicial para intimidar y enjuiciar a personas que critican las políticas o las medidas del régimen. Foro Penal informó de que al 11 de noviembre había 399 presos políticos detenidos por el régimen, lo que supone un aumento con respecto a los 286 registrados a finales de 2018. El régimen detuvo sistemáticamente a presos políticos en las instalaciones del SEBIN o en la prisión militar de Ramo Verde, sin explicar por qué no se los recluía en los centros de detención para civiles.

El 23 de febrero, la GNB detuvo a Elwin Mendoza, activista del partido opositor en el Estado Zulia, por manifestar a favor del ingreso de ayuda humanitaria al país. Según informaron los medios de comunicación, el tribunal militar a cargo del caso de Mendoza rechazó las solicitudes de examen médico presentadas por su familia y sus abogados en vista del deteriorado estado de su salud. El 25 de marzo, Mendoza murió de insuficiencia respiratoria derivada de tuberculosis y neumonía.

El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, permanecía en prisión al 18 de diciembre. Su juicio comenzó el 12 de diciembre, tras haber sido postergado dos veces. Observadores internacionales criticaron irregularidades en el juicio de Requesens, incluida la falta de transparencia y de garantías del debido proceso legal. En agosto de 2018 las autoridades arrestaron a Requesens por su presunta participación en el intento de asesinato de Maduro. Los videos publicados poco

después de su arresto mostraban a Requesens visiblemente debilitado y en condiciones insalubres.

Tras dos años de arresto domiciliario, el líder encarcelado del partido de oposición, Leopoldo López, se escapó durante las manifestaciones en masa del 30 de abril y buscó refugio en la embajada de España, donde aún permanece alojado. El 2 de mayo, el régimen anterior de Maduro emitió una orden de arresto para López.

Represalia por motivos políticos contra personas que se encuentran fuera del país

Hubo denuncias fidedignas de que el régimen anterior de Maduro intentó hacer uso indebido de instrumentos internacionales de aplicación de la ley para fines políticos, como actos de represalia contra determinadas personas que se encuentran fuera del país.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Aunque existen tribunales civiles independientes, que permiten a los ciudadanos interponer demandas de indemnización, no hay procedimientos para que las personas o las organizaciones puedan demandar resarcimiento en casos de derechos humanos.

f. Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La constitución dispone la inviolabilidad del hogar y de la intimidad personal, pero en general el régimen anterior no ha respetado esas prohibiciones. En muchos casos, en particular relacionados con la oposición política, las autoridades alineadas con el régimen han allanado hogares sin autorización judicial ni otra clase de autorización adecuada, han incautado bienes sin el debido proceso o han interferido en las comunicaciones personales. Las FAES y otras fuerzas de seguridad realizaron periódicamente allanamientos indiscriminados. En informes de los medios de comunicación se documentaron redadas realizadas por las fuerzas de seguridad durante el año en hogares de hasta diez políticos del partido de la oposición.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa

La ley establece la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa; sin embargo, el conjunto de leyes y reglamentos que rigen la difamación y el contenido de los medios, así como el acoso legal, la intimidación física de las personas y los medios y la influencia del poder ejecutivo en el sistema judicial dieron lugar a una importante represión de esas libertades. Organizaciones nacionales e internacionales como la CIDH, Human Rights Watch, Freedom House, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas condenaron las medidas dictadas por el régimen anterior durante todo el año para restringir la libertad de prensa y generar un clima de temor y de autocensura.

Libertad de expresión: la ley sanciona los actos que insultan al presidente con penas de seis a 30 meses de prisión, sin poder acogerse a la libertad bajo fianza, y rigen sanciones menores por insultar a funcionarios de rango inferior. En 2017 la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima aprobó definitivamente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que estipula penas de prisión de hasta 20 años. Si bien el régimen anterior afirmó que el propósito de la ley era promover “la paz y la tolerancia”, las ONG observaron que la imprecisa formulación de la ley permitiría su uso para acallar a partidos políticos, activistas y dirigentes de la sociedad civil, así como a medios de comunicación y periodistas. Los comentarios que expongan a otra persona al escarnio u odio públicos acarrearán multas y penas de prisión de uno a tres años. En abril, Espacio Público informó del arresto de 24 personas en 2018 por haber criticado al régimen en línea.

El 1 de junio, miembros de la DGCIM arrestaron a Karen Palacios Pérez, de profesión clarinetista, por “instigación al odio”. Palacios publicó tweets de crítica al régimen tras haber perdido su puesto en la Orquesta Filarmónica Nacional por haber firmado una petición en contra de Maduro. El 16 de julio Palacios fue excarcelada, un mes después de que un juez ordenara su excarcelación inmediata.

Prensa y medios de comunicación, inclusive la prensa en línea: la ley establece que la divulgación de información inexacta que perturbe la paz del público conlleva penas de dos a cinco años de prisión. El requisito de que los medios divulguen solamente información “veraz” no estaba definido y se prestaba a interpretación política.

La ley prohíbe a todos los medios divulgar mensajes que inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas, de género, raciales o

xenóforas; inciten, promuevan o condonen actos delictivos; constituyan propaganda de guerra; fomenten la ansiedad en la población o afecten el orden público; no reconozcan a las autoridades gubernamentales legítimas; inciten al homicidio; o inciten o promuevan la desobediencia al ordenamiento jurídico establecido. Las sanciones van desde multas hasta la revocación de las concesiones. La amenaza de no renovar las concesiones llevó sistemáticamente a varios medios de comunicación a practicar la autocensura.

A pesar de esas leyes, Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alineado con el régimen utilizaron durante el año los casi 600 medios de comunicación propiedad del régimen anterior o controlados por este para insultar e intimidar a la oposición política. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, siguió utilizando su programa televisivo semanal para denunciar a distintos periodistas y medios de comunicación.

La ley declara que las telecomunicaciones son un “servicio de interés público”, con lo cual confiere al Estado autoridad para reglamentar el contenido y la estructura de los sectores de radio, televisión y producción audiovisual. La ley dispone que el gobierno puede suspender o revocar las concesiones cuando juzgue que esas medidas son necesarias en interés de la nación, el orden público o la seguridad. La ley faculta al gobierno para imponer multas elevadas y cancelar transmisiones por infracciones de sus normas; la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) supervisa la aplicación de la ley.

El régimen anterior de Maduro siguió entablado acciones judiciales contra prominentes medios de comunicación independientes, como Tal Cual, El Nacional, El Nuevo País, La Patilla, El Pitazo y Globovisión. En junio el TSJ ordenó a La Patilla pagar 30.000 millones de bolívares (US \$1,4 millones) al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Cabello, por “daño moral e injuria”, por reeditar un artículo proveniente del periódico español ABC que indicaba que Cabello era objeto de investigación en los Estados Unidos por tráfico de drogas.

Espacio Público informó de 522 casos de violación de la libertad de expresión entre enero y abril, lo que supone un incremento del 314% en comparación con el mismo período en 2018 y la segunda cifra más alta desde que la organización comenzó a hacer un seguimiento de los casos en 2002. Las infracciones más comunes fueron agresiones a periodistas y censura. Los medios de comunicación propiedad del régimen o influenciados por este presentaron casi continuamente una programación en favor del régimen. Además, durante todo el año se impusieron a las estaciones privadas y públicas de radio y televisión transmisiones obligatorias

de programas de alcance nacional (“cadenas”), incluida una transmisión diaria de 15 minutos en la que se proporcionan informes y reseñas de las actividades del régimen anterior. Los medios de comunicación informaron de que con frecuencia la GNB impedía a los periodistas ingresar a la Asamblea General para cubrir los debates y las actividades del órgano legislativo. ONG señalaron que el proveedor de servicios de internet propiedad del régimen, CANTV, también bloqueó sistemáticamente la transmisión de anuncios publicitarios y las búsquedas en la web durante los discursos del presidente interino Guaidó y las sesiones semanales de la Asamblea Nacional.

Según la ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el régimen anterior detuvo a 39 periodistas en los primeros tres meses del año, lo que supone un aumento con respecto a las 22 detenciones registradas en todo el año 2018. Según informes de medios de comunicación, el 11 de marzo agentes del SEBIN detuvieron al periodista Luis Carlos Díaz y confiscaron su equipo, después de que informara de los cortes de electricidad que afectaron a todo el país a principios de marzo. En su programa de televisión semanal, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Cabello, acusó a Díaz de estar involucrado en una conspiración para sabotear el sistema eléctrico del país. Tras haber sido acusado de “instigación a delinquir”, Díaz fue liberado, aunque se le prohibió salir del país y realizar declaraciones públicas.

Para el ejercicio del periodismo la ley exige tener título de periodista y estar afiliado al Colegio Nacional de Periodistas y estipula penas de prisión de tres a seis meses para quienes ejerzan la profesión ilegalmente. Los extranjeros y los columnistas de opinión están exentos de estos requisitos.

Violencia y acoso: altos funcionarios nacionales y estatales del régimen anterior de Maduro siguieron acosando e intimidando a periodistas, estaciones de televisión y medios de comunicación privados y propiedad de la oposición, valiéndose de amenazas, incautaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales y enjuiciamientos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTTP) informó de 244 ataques a periodistas entre enero y junio. El expresidente Maduro y algunos funcionarios públicos alineados con el régimen utilizaron los medios de comunicación controlados por el régimen para acusar a los dueños, directores y reporteros de los medios privados de fomentar campañas de desestabilización del régimen e intentos de golpes de estado. También hubo actos de acoso por funcionarios del régimen anterior de Maduro contra periodistas extranjeros que trabajaban en el país.

Censura o restricción del contenido: ONG indicaron que el régimen anterior de Maduro prefería recurrir a procedimientos judiciales, sanciones financieras y medidas administrativas contra los medios de comunicación adversos en vez de clausurarlos directamente. Algunos miembros de medios independientes indicaron que ejercían la autocensura habitualmente, por temor a las represalias del régimen. Esto tuvo como consecuencia que muchos periodistas publicaran artículos en sus blogs y sitios web personales en vez de hacerlo en los medios de comunicación tradicionales.

El régimen anterior también ejerció control sobre el contenido, por medio de requisitos de transmisión y valiéndose de la facultad de otorgar concesiones. La CONATEL actuó en forma selectiva respecto de las solicitudes de renovación de las frecuencias de transmisión de las emisoras privadas de radio y televisión. Según Nelson Belfort, expresidente de la Cámara Venezolana de Radiodifusión, e informes de ONG, aproximadamente un 80% de las estaciones de radio se encontraban en situación “ilegal” en todo el país debido a que la CONATEL no había renovado las concesiones de la mayoría de las emisoras de radio desde 2007.

Según el SNTP, medios de prensa escrita cerraron sus puertas durante el año debido a las políticas económicas del régimen anterior de Maduro, que dificultaban el acceso de los periódicos independientes a divisas, lo que ha impedido a muchos de ellos adquirir suministros y equipos esenciales para su actividad cotidiana. Periódicos nacionales y regionales dejaron de imprimir por falta de suministros, en particular papel periódico, entre ellos el diario nacional El Nacional, El Regional, de Zulia, El Aragüeño, de Aragua, El Luchador, de Bolívar, y Panorama, de Zulia.

El régimen anterior de Maduro controló gran parte de las empresas del país y contrató publicidad únicamente en los medios propiedad del régimen o simpatizantes de este.

Leyes sobre difamación: funcionarios alineados con el régimen tomaron represalias contra personas que habían expresado críticas públicas a Maduro o a la política del régimen. Maduro no actuó en función de su declaración de 2017 relativa a que recurriría a las leyes sobre difamación para “defender su honor” ante un tribunal contra las acusaciones de los líderes de la oposición que le responsabilizaban por las muertes vinculadas a las manifestaciones.

Seguridad Nacional: la ley permite al gobierno suspender o revocar las concesiones cuando lo juzgue necesario en aras de los intereses del orden público o de la seguridad. El régimen anterior de Maduro ejerció control sobre la prensa a través

del ente público Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013, análogo a otro ente gubernamental, el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), fundado en 2010. El CESNA y el CESPPA tienen mandatos similares y se encargan de recopilar, procesar, analizar y clasificar la información emanada del régimen y demás información pública, con el fin de proteger los intereses y objetivos del Estado.

Durante el año, el expresidente Maduro renovó cuatro veces el “estado de excepción” que invocó inicialmente en 2016, aduciendo la persistente crisis económica y se confirió a sí mismo la facultad de restringir derechos estipulados en la constitución. El decreto de emergencia de 60 días, que por ley es renovable una única vez y requiere la aprobación de la Asamblea Nacional para entrar en vigor, permite al presidente impedir cualquier medida que, a su juicio, pudiera “vulnerar la seguridad de la Nación” u “obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional”. La Asamblea Nacional siguió rehusándose sistemáticamente a ratificar cada renovación y el Tribunal Supremo anuló cada denegación, argumentando que el estado de “desacato” de la Asamblea convertía en “inconstitucional” la no aprobación de la renovación. Según Human Rights Watch, el “estado de excepción” perjudicó los derechos a la libertad de asociación y de expresión.

Repercusiones no gubernamentales: la violencia generalizada en el país impidió determinar si las agresiones a periodistas fueron consecuencia de actividades de delincuencia común o si los miembros de los medios de comunicación eran blanco específico de delincuentes u otros agentes.

Libertad de acceso a internet

El régimen anterior de Maduro restringió o interrumpió el acceso a internet y censuró el contenido en línea. El régimen anterior ejerció un amplio control sobre internet a través del ente estatal CONATEL. Acceso Libre, una ONG centrada en el ámbito de la libertad de expresión y la justicia social, informó de que la CONATEL secundó la fiscalización de las comunicaciones privadas y la represión de los usuarios de internet que expresaban opiniones disidentes en línea. Según informes de los medios de comunicación, los usuarios de las redes sociales han acusado a la CONATEL de fiscalizar sus actividades en línea y transmitir información personal a organismos de inteligencia del régimen, como el SEBIN. Según Acceso Libre, la CONATEL proporcionó información al SEBIN, en particular direcciones de protocolo de internet, que ayudaron a las autoridades del

régimen anterior de Maduro a localizar a los usuarios.

La ley asigna a los proveedores de servicios de internet la responsabilidad de filtrar los mensajes electrónicos prohibidos y permite que la CONATEL ordene a los proveedores de servicios el bloqueo del acceso a los sitios web que infrinjan estas normas y sanciona a los proveedores con multas por difundir mensajes prohibidos. IPYS informó de que en los primeros seis meses del año los proveedores de servicios de internet privados y controlados por el régimen bloquearon el acceso a 48 páginas web por orden de la CONATEL. El 70% de los dominios de internet censurados durante ese período pertenecían a plataformas de medios sociales y canales de noticias, entre ellos NTN24, VIVOplay, El Pitazo, VPItv, El Nacional, Aporrea y Noticia al día.

El director de la CONATEL, Jorge Elieser Márquez Monsalve, reiteró el argumento de sus predecesores de que la función de la Comisión es hacer cumplir la ley y prevenir la difusión de información ilegal o material inadecuado para niños y adolescentes. Sin embargo, el régimen anterior de Maduro siguió bloqueando sitios de internet que publicaban tasas de cambio del dólar y del euro a bolívares que diferían del tipo de cambio del régimen anterior. El proveedor de servicios de internet propiedad del régimen anterior, CANTV, facilitó los bloqueos. Según IPYS, el régimen bloqueó sitios web durante acontecimientos de interés público. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el 21 de enero poco después de un intento de sublevación por una unidad militar en el estado Zulia, que recibió amplia cobertura de redes sociales y medios de comunicación en línea, se produjeron varios cortes de internet en la región, que afectaron particularmente a los usuarios de YouTube y Google Search, combinados con restricciones de acceso a Twitter e Instagram. Según NetBlocks, los servicios de Facebook, Instagram, YouTube y Periscope fueron bloqueados de forma temporal.

Los organismos de inteligencia alineados con el régimen, que carecían de supervisión independiente, realizaron actividades de vigilancia con fines políticos. Los tribunales se basaron en pruebas provenientes de “patriotas cooperantes” anónimos para hostigar a personas consideradas opositoras del régimen anterior, y altos funcionarios alineados con el régimen anterior de Maduro usaron información personal recopilada por patriotas cooperantes para intimidar a críticos del régimen y a defensores de los derechos humanos. Se procedió al arresto de algunos usuarios, que fueron acusados penalmente por acciones como la publicación en Twitter de información pública disponible en páginas web.

En febrero se publicó en cuentas de Twitter favorables al régimen una base de

datos con información personal sobre simpatizantes de la oposición, creada tras una operación de captación ilegítima de datos confidenciales vinculada al régimen anterior.

Libertad académica y actos culturales

No se presentaron informes sustantivos de que el régimen anterior de Maduro restringiera actos culturales, pero el régimen impuso restricciones a la libertad académica. Aula Abierta, una ONG local de derechos humanos centrada en las libertades académicas, informó de que el régimen anterior ejercía represalias contra las universidades autónomas favorables a la oposición, asignándoles fondos insuficientes y omitiendo el ajuste de las asignaciones presupuestarias en función de la inflación. De acuerdo con informes de medios de comunicación, las universidades registraron profundos déficits ya que recibieron menos del 10% de los fondos presupuestados para cubrir sus costos operativos. En 2017, el Consejo Nacional de Universidades, órgano de gobierno que rige la educación universitaria, cedió sus funciones a la ANC, ignorando así la ley que exige la autonomía universitaria.

El régimen anterior de Maduro siguió incrementando su control sobre las universidades locales, incluido el proceso de admisión.

En agosto el TSJ ordenó a la Universidad Central de Venezuela que realizara elecciones cada seis meses. El fallo, que también se aplicó a otras ocho universidades públicas y privadas, estipula que el candidato electo debe ganar en al menos tres de los cinco sectores electorales (docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo y personal obrero) por mayoría absoluta de votos. Los estudiantes y dirigentes universitarios calificaron el fallo de ataque a la autonomía universitaria, en violación de la constitución, e indicaron que dará lugar a la colocación de simpatizantes del régimen a la cabecera de las universidades.

El régimen anterior prosiguió su práctica, anunciada en 2018, de incentivos financieros educativos para los poseedores del carnet de la patria, una tarjeta de beneficios sociales emitida por el régimen y suministrada principalmente a sus partidarios (véase la Sección 3 “Partidos políticos y participación en la política”).

b. Libertades de reunión y de asociación pacíficas

Libertad de reunión pacífica

La constitución establece este derecho, pero en general el régimen anterior de Maduro lo ha reprimido o suspendido. La ley reglamenta el derecho de reunión. Los grupos de derechos humanos siguieron criticando esa ley que permite al régimen anterior imputar delitos graves a manifestantes por participar en manifestaciones pacíficas. Algunas expresiones ambiguas de la ley también permiten al régimen anterior penalizar a las organizaciones que lo critican. Las manifestaciones y las marchas requieren autorización previa del régimen anterior y están prohibidas dentro de las “zonas de seguridad” establecidas. Durante el año, los ciudadanos organizaron pequeñas manifestaciones esporádicas y a menudo espontáneas para reclamar bienes y servicios básicos como abastecimiento de agua, gasolina y electricidad. La oposición política y la sociedad civil organizaron marchas en apoyo del presidente interino Juan Guaidó y piden un gobierno de transición y nuevas elecciones presidenciales. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 10.477 manifestaciones en los primeros seis meses del año, más del doble que en el mismo período de 2018. Según el ACNUDH, entre enero y mayo un total de 66 personas murieron durante manifestaciones; algunos de esos incidentes se caracterizaron por un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las FAES, la GNB, el CPNB y los colectivos armados. De acuerdo con Foro Penal, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 1.300 personas durante manifestaciones que tuvieron lugar entre enero y mayo.

Durante una manifestación que tuvo lugar el 2 de julio en el estado Táchira, Rufo Chacón, de 16 años, quedó ciego después de que las fuerzas policiales le dispararon 52 perdigones de goma en la cara. Según informaron los medios de comunicación, la investigación policial determinó que las fuerzas de seguridad se desplazaban sin previo aviso para reprimir a los manifestantes cuando dispararon balas de goma a la multitud. El exfiscal general del régimen anterior de Maduro, Tarek William Saab, anunció que las autoridades acusaron a dos oficiales de policía de tratos crueles relacionados con este caso.

Libertad de asociación

La constitución establece la libertad de asociación y el derecho a la no discriminación política, pero el régimen anterior de Maduro no respetó esos derechos. Aunque las asociaciones profesionales y académicas generalmente funcionaban sin interferencia, varias asociaciones denunciaron que el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que está encargado de convocar todas las elecciones y fijar sus fechas y procedimientos electorales, interfirieron reiteradamente en sus intentos de llevar a cabo elecciones internas.

Un decreto presidencial de 2016 dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendiera toda financiación internacional a las ONG cuando “se presuma” su utilización “con fines políticos o de desestabilización”.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto en el mundo (*International Religious Freedom Report*) en <https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/>.

d. Libertad de circulación

La constitución dispone la libertad de circulación dentro del país, los viajes al exterior, la emigración y la repatriación; sin embargo, el régimen anterior de Maduro no respetó estos derechos.

El 22 de febrero, el régimen anterior cerró sus fronteras con Aruba, el Brasil y Colombia para evitar el ingreso de ayuda internacional. Los medios de comunicación informaron de que las fronteras con Aruba y el Brasil se reabrieron el 10 de mayo y la frontera con Colombia se reabrió parcialmente un mes después.

En julio el régimen anterior de Maduro anunció el envío de una unidad de policía especial de migración al estado Táchira, en la frontera con Colombia. Aunque algunas ONG expresaron su preocupación de que el régimen anterior utilice la unidad para restringir los viajes internacionales de determinadas personas, el régimen anterior afirmó que esta fuerza cumplirá fundamentalmente las funciones de aduana y de patrulla fronteriza. El régimen anterior declaró que la policía migratoria garantizará la seguridad de los ciudadanos en los puestos de migración y creó 72 puestos de control para hacer un seguimiento de la situación fronteriza y disipar lo que denominó mitos sobre una supuesta crisis migratoria en el país.

Con frecuencia las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza excesiva para controlar a los residentes de estados fronterizos con Colombia. A fines de febrero los colectivos ejercieron actos de particular violencia contra ciudadanos del estado Táchira.

Aunque no había estadísticas oficiales disponibles, un albergue para mujeres denunció problemas recurrentes de violencia por motivos de género y de trata de mujeres refugiadas. ONG informaron de que venezolanos que se desplazaron a través de cruces de frontera informales controlados por grupos armados se

enfrentaron a riesgos de protección considerables, incluidos actos de violencia por motivos de género. A menudo se obligó a las personas a pagar un tipo de impuesto en el pasaje de frontera informal o a endeudarse con quienes las controlaban, lo que las exponía a riesgos de explotación, acoso y violencia sexual, así como al reclutamiento para el tráfico de drogas y otros grupos armados.

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

Circulación en el país: el régimen anterior restringió los desplazamientos de algunos dirigentes de la oposición, impidiéndoles viajar en compañías aéreas controladas por el régimen anterior y negándoles el acceso a ciertos vuelos nacionales.

Viajes al exterior: durante el año se hizo cada vez más difícil obtener un pasaporte. Los solicitantes esperaban toda la noche en filas y a menudo no recibían los pasaportes después de años de demoras. Se informó de que algunos solicitantes pagaron varios miles de dólares estadounidenses para obtener un pasaporte. El régimen anterior se incautó varias veces de pasaportes de periodistas, miembros de la oposición y diputados de la Asamblea Nacional en puertos de entrada, sin brindar explicaciones, cuando intentaban salir del país.

Exilio: contrariamente a 2018, no hubo casos de ciudadanos a quienes se les negara el derecho a volver a su país.

e. Desplazados internos

No corresponde.

f. Protección de refugiados

Maltrato de migrantes, refugiados y apátridas: debido a que el proceso de determinación de la condición de refugiado estaba centralizado en la sede de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), en Caracas, los solicitantes de asilo a menudo esperaban años para recibir una decisión final. Durante ese período tenían que renovar su documentación cada tres meses para poder permanecer en el país y evitar la detención y la deportación. Durante su camino a la Comisión, en especial los grupos vulnerables, como las mujeres con hijos pequeños, los adultos mayores y las personas con discapacidades, enfrentaron

riesgos personales cada vez mayores como la detención y la deportación, la extorsión, la explotación y el abuso sexual por las autoridades de los puestos de control y otros lugares.

El régimen anterior no colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ni con otras organizaciones humanitarias en lo que respecta a dar protección y ayuda a los refugiados, los solicitantes de asilo y otras personas de interés.

Acceso a asilo: la ley dispone la concesión de asilo o la condición de refugiado y el gobierno cuenta con un sistema para brindar protección a los refugiados. Según el ACNUR, la gran mayoría de los solicitantes de asilo vienen de Colombia. La mayoría de esas personas permaneció sin protección. La mayoría de los colombianos no había accedido a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado debido a la ineficiencia del proceso. El ACNUR informó de que pocas personas que necesitaban protección internacional habían sido legalmente reconocidas como refugiados.

Acceso a servicios básicos: los solicitantes de asilo colombianos que carecen de permisos de residencia legal tenían acceso limitado al mercado laboral y a los sistemas de educación y salud. La falta de documentación les planteaba dificultades considerables para la obtención de protección suficiente y la integración a largo plazo. Las autoridades del régimen anterior permitieron que niños colombianos asistieran a la escuela, pero no les otorgaban sistemáticamente diplomas ni certificados de estudios sin los documentos de residencia, lo que se tradujo en altos índices de deserción escolar entre los niños colombianos. En junio, la CONARE anunció la creación de un carnet de control migratorio fronterizo, similar al carnet de la patria, para los refugiados presentes en el país.

g. Personas apátridas

No corresponde.

Sección 3. Libertad de participar en el proceso político

La constitución de 1999, la 26.^a del país desde su independencia en 1811, da a los ciudadanos la posibilidad de cambiar su gobierno por medio de elecciones libres e imparciales, pero la interferencia del régimen, las irregularidades electorales y la manipulación de los votantes y los candidatos restringió el ejercicio de este derecho en las elecciones presidenciales y municipales de 2018.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: en mayo de 2018 el CNE supervisó elecciones presidenciales con profundas deficiencias, calificadas por la oposición política y los observadores internacionales de fraudulentas y anticonstitucionales. En diciembre de 2018 el CNE supervisó elecciones municipales con profundas deficiencias, que atrajeron una participación muy baja debido a la apatía de los votantes.

El segundo mandato presidencial ilegítimo de Nicolás Maduro comenzó el 10 de enero, en lo que la oposición calificó de “usurpación de poder”. El 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó el Artículo 233 de la constitución, que insta al presidente de la Asamblea Nacional a asumir la función de presidente interino en caso de vacante presidencial. Durante todo el año los partidos de la oposición respaldaron a Guaidó y en septiembre lo apoyaron para que continuara liderando la Asamblea Nacional en 2020 y siguiera desempeñándose como presidente interino hasta que finalizara la usurpación del régimen anterior.

Partidos políticos y participación en la política: los partidos políticos de la oposición y los disidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) actuaron en un ambiente cada vez más restrictivo, caracterizado por la intimidación, la amenaza de enjuiciamiento o de sanciones administrativas por acusaciones dudosas y el acceso muy restringido a los principales medios de comunicación.

El régimen anterior de Maduro atacó periódicamente a la Asamblea General y a otros políticos de la oposición por medio de actos o amenazas de violencia, arrestos arbitrarios, persecuciones por motivos políticos, violación de la privacidad y restricciones de circulación. El 17 de octubre el cuerpo del concejal de la oposición, Edmundo Rada, fue hallado con un disparo en el cuello y parcialmente incinerado. Esta situación evocó un asesinato similar del exgobernador de Cojedes, miembro de la oposición, Jhonny Yáñez Rangel, que fue hallado el 24 de septiembre por el CICPC con un disparo en el rostro dentro de su auto incendiado. Durante el año, las fuerzas de la GNB negaron o limitaron el acceso de los miembros de la Asamblea Nacional al palacio legislativo federal durante las sesiones parlamentarias programadas sistemáticamente. Hasta septiembre el TSJ, controlado por el régimen, había despojado de inmunidad parlamentaria a 24 diputados, lo que obligó a muchos a esconderse o exiliarse para evitar el arresto arbitrario.

El 8 de mayo, agentes del SEBIN detuvieron al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, remolcando el auto del legislador con él adentro hasta la sede del SEBIN. Durante su detención Zambrano inició una huelga de hambre de 10 días para protestar por las condiciones humanas y los derechos de visita y solicitar la liberación de cuatro miembros de su personal detenidos. Tras meses de retrasos judiciales, el régimen anterior liberó a Zambrano el 18 de septiembre, pero su personal de apoyo permaneció encarcelado. Zambrano siguió sujeto a “medidas cautelares” no especificadas, incluida la obligación de comparecer ante un juez cada 30 días y la prohibición de abandonar el país.

Durante el año, el régimen anterior de Maduro extendió el programa del carnet de la patria, introducido en 2017 como tarjeta de identificación polivalente, como requisito para acceder a los servicios sociales financiados por el régimen. Según se informó, a los titulares de ese carnet se les otorgó primas financieras y acceso exclusivo a becas escolares, gasolina y alimentos subsidiados, y otras ayudas gubernamentales. Según el régimen anterior de Maduro, hasta septiembre más de 18,5 millones de unos 28,5 millones de residentes se habían inscrito para obtener el carnet. Como requisito para ello, los solicitantes deben proporcionar prueba de su afiliación política y responder a preguntas relacionadas con las prestaciones que reciben del servicio social. Los detractores de Maduro afirmaron que esa tarjeta equivalía al control social, herramienta para promover el acceso a los escasos productos de consumo subsidiados a cambio de lealtad política.

Participación de la mujer y de las minorías: ninguna ley limita la participación de las mujeres ni de las minorías en el proceso político, y ambos grupos lo hicieron. El régimen anterior contó con ministras y mujeres entre los políticos de alto nivel, mientras que la oposición carecía de representación femenina y minoritaria en los altos puestos.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales para la corrupción por parte de funcionarios, pero el régimen anterior de Maduro no aplicó la ley con eficacia. Algunos funcionarios reconocieron explícitamente que la corrupción es un problema grave. Con frecuencia, el régimen anterior investigaba, enjuiciaba y detenía a sus opositores políticos con acusaciones de corrupción con el fin de hostigarlos, amedrentarlos o encarcelarlos. Según Transparency International, entre las principales razones de la corrupción generalizada en el país se encontraban la impunidad, la debilidad de las instituciones y la falta de transparencia en la gestión

de los recursos gubernamentales.

Corrupción: según el fiscal general del régimen anterior de Maduro, Tarek William Saab, 915 personas fueron condenadas por cargos de corrupción desde 2018. Sin embargo, el régimen no proporcionó información sobre los presuntos casos o personas condenadas.

La corrupción fue un problema grave en todas las fuerzas armadas y de seguridad, cuyos miembros, por lo general, estaban mal remunerados y habían recibido una capacitación mínima. No se divulgó información pública sobre el número de casos registrados en el año con participación de efectivos de la policía y militares, aunque el Ministerio Público dio publicidad a varios casos particulares entablados contra oficiales de policía por pedir sobornos y por otros actos de corrupción.

Divulgación de información financiera: la ley exige a los funcionarios públicos, así como a todos los directores y miembros de las juntas directivas de las empresas privadas, la divulgación de declaraciones juradas de patrimonio. La ley permite al Ministerio Público y a los tribunales penales competentes exigir esas declaraciones a terceros cuando surjan pruebas circunstanciales en el transcurso de una investigación.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestos abusos de los derechos humanos

Diversos grupos nacionales e internacionales independientes de derechos humanos actuaron, por lo general, con restricciones impuestas por el régimen anterior de Maduro. Las principales ONG nacionales de derechos humanos llevaron a cabo investigaciones y publicaron sus resultados sobre casos de derechos humanos. Raramente los funcionarios del régimen anterior se mostraron dispuestos a cooperar o a responder a sus solicitudes. Las ONG locales denunciaron el temor de que el régimen anterior utilice la Ley Constitucional contra el Odio de 2017 para justificar la represión generalizada de sus actividades, la encarcelación de participantes y organizadores y las amenazas contra miembros de sus familias. Algunas ONG locales denunciaron amenazas y hostigamiento a sus dirigentes, su personal y sus organizaciones, además de redadas y detenciones, pero lograron publicar decenas de informes durante el año. Algunos activistas de derechos humanos informaron de que las autoridades del régimen anterior les prohibieron viajar al extranjero o de que temían no poder regresar al país si lo hacían. Las ONG cumplieron una importante función de información a los ciudadanos y a la comunidad internacional acerca de las presuntas violaciones y los principales casos

referentes a los derechos humanos.

Las ONG indicaron que el régimen anterior de Maduro generó un clima que les hacía peligroso su funcionamiento. El primer vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se sirvió de su tertulia semanal para intimidar al personal de las ONG Espacio Público, PROVEA y Foro Penal. Varias organizaciones, como el OVP, PROVEA, Foro Penal y Control Ciudadano, informaron de que su personal recibió amenazas tanto por vía electrónica como en persona. Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que eran objeto de frecuentes ataques de piratas informáticos por internet y de tentativas de violación de la privacidad de sus correos electrónicos.

La ley prohíbe que las ONG nacionales reciban fondos desde el extranjero cuando tienen “intención política”, definida como la intención de promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos o de “defender derechos políticos”. El régimen anterior de Maduro amenazó a las ONG con iniciar investigaciones penales por presunta aceptación ilícita de financiación extranjera. Diversos funcionarios del régimen anterior acusaron a las organizaciones de derechos humanos, por emisoras de televisión nacionales y otros medios, de infringir la ley al recibir financiación de donantes internacionales. Las ONG también informaron de que el régimen anterior se negó a otorgarles registro legal, lo que les impide recibir financiación internacional.

La ley sanciona las infracciones con multas, una posible inhabilitación de cinco a ocho años para postularse al ejercicio de cargos públicos o ambas sanciones. La ley define las organizaciones políticas como las que promueven la participación ciudadana, ejercen control sobre los cargos públicos o promueven a candidatos a cargos públicos. Aunque la ley no se aplicó ni se impuso de manera formal, ha generado un clima de temor entre las ONG de derechos humanos y cierta renuencia a buscar ayuda internacional.

Además de las limitaciones impuestas a la recaudación de fondos, las ONG nacionales también tuvieron que hacer frente a restricciones reglamentarias que limitan su capacidad para cumplir sus cometidos. La ley contiene disposiciones que eliminan el derecho de las ONG de defensa de los derechos humanos a representar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en los procedimientos judiciales. La ley establece que solamente el defensor público y los particulares pueden interponer demandas judiciales o representar a las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o por miembros de las fuerzas de seguridad.

Las Naciones Unidas u otros organismos internacionales: en general, el régimen anterior de Maduro se mostró hostil con los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y continuó negándose a autorizar una visita de la CIDH, que visitó el país por última vez en 2002. El ACNUDH realizó una visita en junio para investigar la situación de los derechos humanos presidida por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se reunió con miembros de la oposición y del régimen anterior. En septiembre el régimen y el ACNUDH firmaron un memorando de entendimiento que prevé la presencia de dos funcionarios de derechos humanos de las Naciones Unidas durante un año. El 27 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución para establecer inmediatamente una misión de investigación de un año para estudiar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014”. Según informes de los medios de comunicación, el enviado especial ante las Naciones Unidas en Ginebra rechazó la resolución y declaró que el régimen anterior no tenía la intención de cooperar.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: durante el año, el régimen anterior prestó muy poca atención al plan de derechos humanos de 2016-2019 y no hubo anuncios de renovación o de actualización de dicho plan.

El TSJ siguió considerando a la Asamblea Nacional en situación de “desacato”, lo que ha limitado el alcance y la eficacia operativa de la subcomisión de derechos humanos de la Asamblea.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: la ley tipifica como delito la violación de hombres o mujeres, incluso la violación conyugal, sancionándola con una pena de prisión de ocho a 14 años. El hombre puede evitar legalmente el castigo si (antes de recaer la sentencia) se casa con la persona a la que violó. La ley permite que las autoridades contemplen penas sustitutivas, como un plan de trabajo externo para las personas condenadas por diversos delitos, incluida la violación, una vez cumplidas tres cuartas partes de la pena.

La ley penaliza la violencia física, sexual y psicológica en el hogar, en la comunidad y en el lugar de trabajo. Castiga a los perpetradores de violencia

doméstica con penas de seis a 27 meses de prisión. La ley exige que la policía denuncie los casos de violencia doméstica a las autoridades judiciales y obliga al personal hospitalario a notificar a las autoridades el ingreso de pacientes que hayan sido víctimas de violencia doméstica. En general, la policía se mostró renuente a intervenir para prevenir actos de violencia doméstica y no estaba capacitada adecuadamente para atender esos casos. La ley también establece oficinas para la mujer en las sedes de la policía local y en tribunales especializados en casos de violencia de género; y dos tercios de los estados tenían tribunales especializados. El Departamento de Defensa de la Mujer del Ministerio Público contaba con un equipo de abogados, siquiátras y otros expertos para ocuparse exclusivamente de casos de feminicidio, violencia de género y otros delitos contra la mujer.

Muchos defensores de la causa de la mujer señalaron que había falta de conciencia pública entre las mujeres con respecto a los recursos y al apoyo que están a su alcance para prevenir y combatir la violencia doméstica. El régimen anterior ofreció algunos servicios y albergues para víctimas de violencia doméstica y de otra índole, pero fueron las ONG las que prestaron la mayoría de los servicios de apoyo relacionados con el maltrato doméstico.

Acoso sexual: el acoso sexual es ilegal y se sanciona con multas y una pena de uno a tres años de prisión. Aunque se afirma que el acoso sexual es común en el lugar de trabajo, se denunciaron muy pocos casos.

Coacción en el control de la población: no se recibieron denuncias de abortos coaccionados ni de esterilizaciones involuntarias.

Discriminación: según la Constitución las mujeres gozan de los mismos derechos y la misma condición jurídica que los hombres. Las mujeres y los hombres gozan de igualdad jurídica en el matrimonio y la ley establece la igualdad de género en el ejercicio del derecho a trabajar. La ley especifica que los empleadores no deben discriminar a las mujeres en lo referente al salario o a las condiciones de trabajo. Según el Ministro de Trabajo y la Confederación de Trabajadores, los reglamentos para la protección de los derechos laborales de las mujeres se aplicaron en el sector formal, aunque según el Foro Económico Mundial las mujeres ganaron un 36% menos en promedio que los hombres en puestos de trabajo comparables.

La ley confiere a mujeres y hombres los mismos derechos en materia de propiedad.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: la ciudadanía se adquiere por nacimiento en el territorio del país. Según el UNICEF, el 81% de los niños menores de cinco años fueron inscritos al nacer, sobre la base de las estadísticas de 2011 proporcionadas por el gobierno.

Maltrato infantil: según el UNICEF y varias ONG que trabajan con niños y mujeres, el abuso infantil, incluido el incesto, ocurría, pero rara vez se denunciaba. El régimen anterior realizó esfuerzos para detener y enjuiciar a algunos autores de maltrato infantil. Aunque el sistema judicial tomó medidas para alejar a los menores de sus familias abusivas, la prensa informó de que los establecimientos públicos para albergar a esos menores eran inadecuados. Según las ONG, en muchos casos se devolvía a los niños a sus hogares sin adoptar las medidas adecuadas de reintegración o de seguimiento.

Matrimonio a edad temprana y forzosos: la edad legal mínima para contraer matrimonio es de 18 años para las mujeres y los hombres; pero con el consentimiento de los padres la edad mínima es de 16 años.

Explotación sexual de menores: de conformidad con la ley, las relaciones sexuales con un menor de menos de 13 años de edad, con una persona “particularmente vulnerable” o con una persona menor de 16 años de edad cuando el autor es un familiar o tutor se castigan con una pena obligatoria de 15 a 20 años de prisión. La ley prohíbe la prostitución y la corrupción forzadas de menores. Las sanciones van de 15 a 20 años de prisión en casos de trabajo forzosos y algunas formas de trata sexual de niñas y mujeres. Para que se considere trata de menores con fines sexuales, la ley exige una demostración de fuerza, fraude o coacción. La ley prohíbe la producción y venta de pornografía infantil y establece penas de 16 a 20 años de prisión.

Menores desplazados: los defensores de los derechos del niño y los medios de comunicación señalaron un aumento del número de niños abandonados que vivían en la calle. Cecodap, ONG de defensa de los derechos de los menores, estimó que 800.000 menores han sido dejados con familiares cuando sus padres huyeron de la crisis económica del país; esos familiares a su vez también luchaban contra la recesión económica del país. Esos niños vivían en el limbo dado que sus padres, que abandonaron el país, no podían transferir legalmente la tutela a un tercero.

Por su hacinamiento, los establecimientos estatales no estaban en condiciones de prestar asistencia a la llegada de niños necesitados. Instituciones privadas denunciaron la negativa del régimen anterior a proporcionar subsidios alimentarios

para ayudar a su población. Las ONG señalaron que las niñas representaban casi la mitad de los menores en situación de calle. Este cambio importante planteó retos particulares para los refugios, que históricamente administraban poblaciones predominantemente masculinas. Debido al hacinamiento en los establecimientos, cientos de menores acusados de cometer infracciones, como el incumplimiento del toque de queda, quedaron confinados en centros de detención juvenil inadecuados.

Sustracción internacional de menores: el país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Véase el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por uno de sus padres (*Annual Report on International Parental Child Abduction*) en

<https://www.travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html>.

Antisemitismo

Hubo denuncias de abusos o discriminación sociales fundados en la afiliación, las creencias o las prácticas religiosas, incluido el antisemitismo.

La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela estimó que había 9.000 judíos en el país. Los líderes de la comunidad judía expresaron preocupación respecto de declaraciones antisemitas realizadas por altos funcionarios alineados con el régimen y obras antisemitas en medios de comunicación favorables al régimen. Indicaron que medios de comunicación propiedad del régimen o asociados a él y partidarios del régimen anterior promovieron teorías de conspiración sionistas y negaron o banalizaron el Holocausto. Los dirigentes de la comunidad indicaron que durante el año ocurrieron muchos otros incidentes antisemitas.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades físicas o mentales, pero el régimen no emprendió esfuerzos significativos para aplicar la ley,

informar al público a su respecto ni combatir el prejuicio social contra las personas con discapacidades. La ley exige que todos los parques y edificios públicos que se construyan o se renueven ofrezcan acceso adecuado a las personas con discapacidades, pero estas tuvieron acceso mínimo al transporte público y prácticamente no existían rampas. Muchas personas con discapacidades manifestaron preocupación respecto de que, con frecuencia, los trabajadores del transporte público eran reticentes a transportarlos, lo que los obligaba a tomar taxis, que generalmente no podían costearse y no estaban equipados para trasladar a clientes con discapacidades. Los padres de niños con discapacidades también se quejaron de que estaban obligados a esperar en largas filas para obtener servicios, en lugar de beneficiarse de la preferencia que les otorga la ley. Por lo general, los recursos en internet y el acceso a la información estaban al alcance de las personas con discapacidades, aunque fue limitado el acceso a videos subtítulos para personas con discapacidades auditivas o videos de audio descrito para personas invidentes. Por otra parte, los principales defensores de las personas con discapacidades auditivas lamentaron las dificultades de acceso a los servicios públicos debido a la falta de fondos del régimen para el pago de intérpretes en los tribunales públicos, los servicios de salud y los servicios jurídicos, así como a la falta de otras adecuaciones públicas.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, organismo independiente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Participación y el Desarrollo Social, defendió los derechos de las personas con discapacidades y ofreció programas médicos, jurídicos, ocupacionales y culturales. De acuerdo con el Consejo, menos del 20% de las personas con discapacidades registradas en los programas de salud del régimen estaban empleadas a tiempo completo.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

La constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza. La ley prohíbe todas las formas de discriminación racial y dispone hasta tres años de prisión por los actos de discriminación racial. Conforme lo ordena la ley, había señalización en el exterior de los establecimientos comerciales y de recreación indicando la prohibición de actos de discriminación racial. Aparte de la señalización, el régimen no hizo mucho por hacer cumplir las leyes contra la discriminación ni por juzgar casos de discriminación.

Indígenas

La ley prohíbe la discriminación por motivos de origen étnico. La constitución

estipula tres escaños en la Asamblea Nacional reservados para diputados de origen indígena y también prevé la protección de las comunidades indígenas y su integración progresiva en la vida de la nación, pero algunas comunidades indígenas no han tenido representación en la legislatura nacional desde que en 2015 el TSJ anuló la elección de representantes indígenas del estado Amazonas.

ONG y medios de comunicación informaron de que las autoridades políticas locales rara vez tenían en cuenta los intereses de los indígenas cuando tomaban decisiones que afectaban a sus tierras, culturas, tradiciones o la asignación de los recursos naturales. Los grupos indígenas siguieron reclamando una ejecución más rápida del proceso de demarcación.

Grupos indígenas y ONG expresaron preocupación con respecto a la explotación minera en el creciente “Arco Minero”, una zona que se extiende entre los estados de Bolívar y Amazonas. Las comunidades indígenas informaron de que el régimen anterior de Maduro creó y desarrolló zonas mineras sin consultar a los nativos de la región, lo que trajo aparejado un incremento en la degradación ambiental, la contaminación del agua y la malaria. En esta zona hubo una fuerte presencia de grupos armados, incluidas guerrillas colombianas y antiguos rebeldes, lo que aumentó el nivel de violencia e inseguridad en las comunidades. Asimismo, en las zonas mineras hubo un ingreso sin precedentes de enfermedades, droga, prostitución y trabajo forzoso, así como de otras actividades ilegales, lo que puso en riesgo a las comunidades indígenas.

Grupos indígenas denunciaron presuntos enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad durante el año. Entre el 22 y el 23 de febrero siete personas fueron muertas como consecuencia de un enfrentamiento en el estado Bolívar entre miembros de la comunidad Pemón y soldados, durante una tentativa de entrega de ayuda internacional en la frontera con el Brasil. El ACNUDH documentó el uso excesivo de la fuerza, disparos indiscriminados a corta distancia por parte de soldados de la GBN y ataques a un hospital, así como la detención y el maltrato de 63 personas. Líderes indígenas informaron del desplazamiento de más de 1.300 miembros de la comunidad como consecuencia de ese incidente.

En diciembre, el ACNUDH expresó preocupación respecto de los altos niveles de violencia continua registrados en el estado Bolívar, incluida la presencia de grupos armados clandestinos que participaron en la explotación ilegal de los recursos naturales. El ACNUDH planteó el ejemplo de una masacre de ocho personas en la comunidad indígena de Ikaburu e indicó que algunos miembros de esa comunidad habían huido por temor a que se produjeran más actos de violencia.

Grupos indígenas denunciaron con regularidad conflictos violentos con mineros y ganaderos en relación con los derechos sobre la tierra. Se denunciaron actos de acoso, agresiones y desalojo forzado de personas indígenas que vivían en zonas incluidas en las concesiones mineras del régimen anterior.

Las controversias fronterizas con Colombia perjudicaron a las comunidades indígenas residentes en las regiones de la frontera. Se informó de muchos casos en los que se restringió la circulación de grupos indígenas, en particular desde los cierres de fronteras en febrero.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos sociales motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La constitución establece la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe la discriminación fundada en “el sexo o la condición social”, pero no prohíbe explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Una sentencia del TSJ establece que ninguna persona puede ser objeto de discriminación por motivo de orientación sexual, pero ese fallo rara vez se aplicó.

ONG fidedignas han denunciado incidentes de violencia motivados por prejuicios contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Los incidentes denunciados fueron más frecuentes contra personas transgénero. Los principales defensores indicaron que, con frecuencia, las autoridades de las fuerzas del orden no realizaron la debida investigación para determinar si los delitos estaban motivados por prejuicios.

Se ha afirmado que la policía local y las fuerzas de seguridad privada impedían que personas LGBTI ingresaran en centros comerciales, parques públicos y espacios recreativos. Las ONG informaron de que el régimen anterior de Maduro sistemáticamente negaba el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al no otorgarles los documentos de identidad exigidos para tener acceso a educación, empleo, vivienda y atención médica. A menudo, esta vulnerabilidad daba lugar a que las personas transgénero o intersexuales se convirtieran en víctimas de la trata o la prostitución.

Estigma social de la infección por el VIH y el sida

La ley establece la igualdad de derechos de las personas con VIH/SIDA y sus familias. Sin embargo, los principales defensores alegaron discriminación contra

esas personas. La ONG local Acción Solidaria informó que durante el año se registraron cinco casos de negación de empleo o renuncia forzada por ser portadores de VIH.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley establece que todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado (excepto los efectivos de las fuerzas armadas) tienen derecho a formar sindicatos y a afiliarse a los de su preferencia, y además contempla la negociación colectiva y el derecho de huelga. Sin embargo, la ley impone varias restricciones a esos derechos y el régimen anterior de Maduro instituyó diversos mecanismos para socavar los derechos de los trabajadores y los sindicatos independientes. El número mínimo de afiliados necesario para formar un sindicato depende del tipo de sindicato. El número mínimo de afiliados necesario para formar un sindicato de empresa es de 20 trabajadores; para formar un sindicato profesional, industrial o sectorial en una jurisdicción se requieren 40 trabajadores del mismo campo; y para formar un sindicato regional o nacional se requieren 150 trabajadores. Diez personas pueden formar una asociación de empleados; se trata de un tipo paralelo de representación que el régimen anterior aprobó y respaldó abiertamente.

La ley prohíbe “todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio” del derecho de los trabajadores a sindicalizarse. La ley exige que todos los sindicatos proporcionen al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo una lista de todos sus afiliados, que incluya el nombre completo, el domicilio, el número de teléfono y el número de identificación nacional de cada afiliado. El ministerio examina la solicitud de inscripción y determina si el sindicato ha cumplido con todos los requisitos. Los sindicatos deben presentar su solicitud de inscripción a más tardar el 31 de diciembre del año de su formación; si el ministerio no la ha recibido o considera que no es satisfactoria, se deniega al sindicato la personería jurídica. La ley exige además la presencia de inspectores de trabajo para que sean testigos de las decisiones de los sindicatos y acrediten su legitimidad ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó inquietudes acerca de la denegación por el Ministerio de la inscripción de las organizaciones sindicales.

Por ley, los empleadores solo pueden negociar contratos colectivos con el sindicato que representa a la mayoría de sus trabajadores. Las organizaciones minoritarias no

pueden negociar conjuntamente cuando no hay ningún sindicato que represente a la mayoría absoluta. La ley también restringe la capacidad de los sindicatos de administrar sus actividades. Por ejemplo, el CNE está facultado para administrar las elecciones internas de los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. De acuerdo con la ley, las elecciones deben llevarse a cabo por lo menos cada tres años. Si dentro de este plazo no se celebran elecciones administradas y certificadas por el CNE, la ley prohíbe que los dirigentes sindicales representen a los trabajadores en las negociaciones o participen en actividades que trasciendan las meramente administrativas. La OIT ha observado reiteradamente casos de interferencia del CNE en los comicios sindicales y desde 1999 ha pedido la desvinculación del CNE de los procesos electorales de los sindicatos.

La ley reconoce el derecho de huelga a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, con sujeción a las condiciones estipuladas por la ley. Según la ley, los trabajadores que participen en una huelga legal están exentos de enjuiciamiento y el tiempo de huelga no puede descontarse de su antigüedad en el trabajo. La ley exige que los trabajadores en huelga sean reincorporados a su empleo e impone penas de prisión suficientes para disuadir a los empleadores infractores. Durante las huelgas legales está prohibido contratar a trabajadores de reemplazo. La ley prohíbe a los trabajadores en huelga paralizar la producción o el suministro de bienes y servicios públicos esenciales, pero define los “servicios esenciales” en términos más amplios que las normas de la OIT. La OIT exhortó al gobierno a enmendar la ley para que excluyera de la definición de “servicios esenciales” las actividades “que no son esenciales en el sentido estricto del término” y para que “en ningún caso se impongan sanciones penales en casos de huelga pacífica”.

El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo puede ordenar a los huelguistas de los sectores público y privado que vuelvan al trabajo y sometan sus conflictos a arbitraje cuando una huelga “ponga en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población o de una parte de ella”. Otras disposiciones jurídicas prescriben sanciones penales por el ejercicio del derecho de huelga en ciertas circunstancias. Por ejemplo, la ley prohíbe determinadas acciones y establece penas de cinco a diez años de prisión para “cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas [es decir, minería], o la vida económico social del país (...)”. La ley también establece penas de prisión suficientes para disuadir a quienes restringen la distribución de bienes de cometer dichas infracciones o para quienes incurren “(...) en acciones u

omisiones que impidan directa o indirectamente la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de los productos (...). No hubo información que permitiera determinar si las penas bastaban para desalentar las infracciones.

El régimen anterior de Maduro impuso restricciones a la libertad de asociación y al derecho de negociación colectiva mediante mecanismos administrativos y jurídicos. El régimen anterior no hizo cumplir eficazmente la ley.

La OIT planteó inquietudes a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela sobre la violencia contra sindicalistas y la intimidación ejercida por el régimen anterior. En 2018 los países miembros de la OIT votaron para crear una Comisión de Encuesta relativa a la República Bolivariana de Venezuela, con miras a investigar reclamaciones de larga data presentadas por primera vez en 2015 sobre violaciones de los derechos laborales de los Convenios N.º 26, 87 y 144, relativos a la fijación del salario mínimo, la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y la consulta tripartita, respectivamente. En octubre, la Comisión emitió su informe al director general, en el que indicó que el régimen anterior había violado reiteradas veces los convenios internacionales para la fijación de salarios mínimos, la libertad de asociación y el derecho a organizarse, así como las normas laborales. También solicitó “la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones”.

Activistas de organizaciones sindicales siguieron informando de que el requisito anual de presentación de las listas de afiliados al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo era oneroso e infringía la libertad de asociación. Alegaron que el Ministerio eliminaba de las listas los nombres de algunos afiliados por razones políticas, especialmente cuando no estaban inscritos en el registro electoral del CNE. Los dirigentes laborales también criticaron el trámite administrativo laborioso y costoso necesario para solicitar la aprobación del CNE para la celebración de elecciones y las demoras posteriores hasta obtener el reconocimiento por el CNE de tales procesos sindicales. Por lo demás, hubo supuestamente una alta rotación de contratistas del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo lo que causó la ausencia de seguimiento oportuno en los procesos sindicales. Los sindicatos de los sectores público y privado citaron demoras prolongadas para obtener el visto bueno del CNE para la celebración de comicios y la certificación de los resultados electorales, lo que menoscababa la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.

El régimen anterior de Maduro siguió apoyando a muchos sindicatos “paralelos” que intentaban disminuir el número de afiliados y la eficacia de los sindicatos independientes tradicionales. El régimen anterior no tuvo en cuenta a otras federaciones sindicales independientes, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Confederación General de Trabajadores de Venezuela, la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela y la Unión Nacional de Trabajadores.

El régimen anterior siguió negándose adjudicar o a resolver de otro modo los casos de 19.000 empleados de la empresa estatal de petróleo (PDVSA) que fueron despedidos durante y después de la huelga de 2002-03. El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo siguió negándole el registro a la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados.

El concepto de huelga, satanizado desde 2002 por una ley de seguridad nacional, se utilizó periódicamente como instrumento político para acusar a los opositores del régimen de conspiración para un golpe de Estado u otras actividades desestabilizadoras. Algunas empresas, particularmente en el sector público, tuvieron varios sindicatos con diversos grados de adhesión a la versión oficialista de la “revolución socialista”, lo que podía generar conflictos y enfrentamientos entre los distintos sindicatos.

ONG informaron de que el régimen anterior siguió acosando a los sindicatos enjuiciando a algunos de sus miembros en tribunales militares. Rubén González, secretario general del sindicato de mineros Sintraferrominera, fue arrestado en noviembre de 2018 tras participar en una manifestación en defensa de los derechos de negociación colectiva y el aumento de salarios. En agosto un tribunal militar condenó a González a cinco años y nueve meses de prisión por “ultraje” a las fuerzas armadas y la GNB. Los dirigentes sindicales describieron el arresto de González como parte de los esfuerzos del régimen para eliminar el sindicato e instalar un sindicato paralelo más flexible mientras se negocia un nuevo acuerdo colectivo.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe algunas formas de trabajo forzoso u obligatorio, pero no establece sanciones penales para ciertos tipos de trabajo forzoso. Asimismo, la ley sobre la delincuencia organizada prohíbe la trata de personas y establece penas suficientes

para disuadir a infractores de cometer actos relacionados con la trata de personas adultas por un miembro de un grupo de delincuencia organizada, integrado por tres o más personas. Sin embargo, la ley sobre la delincuencia organizada no prohíbe la trata por cualquier persona no integrante de un grupo de delincuencia organizada. Los fiscales pueden utilizar otras leyes para enjuiciar a estas personas. La ley incrementa las penas para los casos de trata de menores con fines de trabajo forzoso. No se contaba con información cabal sobre la aplicación de la ley por parte del régimen anterior. El grupo laboral Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS) informó de que los acuerdos de trabajadores del sector público incluían disposiciones que exigían la prestación de servicios en las reservas de las fuerzas armadas.

Hubo informes de menores y adultos sometidos a la trata de personas con fines de trabajo forzoso, en particular en el sector económico informal y el trabajo doméstico (véase la sección 7.c.). Según el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), más de 60.000 cubanos trabajaron en programas sociales del régimen anterior de Maduro (como la Misión Barrio Adentro) a cambio del suministro de recursos petroleros del régimen al Gobierno de Cuba. El FADESS indicó que los ciudadanos cubanos trabajaban en los Ministerios de Educación, Registro, Notarial, Comunicaciones y Seguridad. También mencionó que el grupo de seguridad cubano G-2 estuvo presente en las fuerzas armadas y en empresas estatales. Algunos miembros del personal médico cubano que participaron en el programa social Misión Barrio Adentro describieron indicadores de trabajo forzoso, como sueldos insuficientes, horarios excesivos obligatorios, restricciones a la circulación, adoctrinamiento político forzoso y amenazas de represalias a los trabajadores y sus familias en caso de abandonar el programa. El Gobierno de Cuba reconoció que retuvo los pasaportes del personal médico cubano que se encontraba en el país.

La ley no prohíbe con suficiente rigor la trata de niños varones, y respecto del delito de trata de niñas exige que se pruebe el uso del engaño, coacción, fuerza, violencia, amenazas, sustracción u otros medios fraudulentos para cometer el delito, incluso para la explotación sexual con fines comerciales.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe las peores formas de trabajo infantil. La ley establece que la edad mínima para el empleo es de 14 años. Los niños menores de 14 años pueden trabajar solamente con permiso especial del Instituto Nacional del Menor o el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Este permiso no se otorga a los menores que no alcancen la edad legal para trabajar en ocupaciones peligrosas que pongan en riesgo su vida o su salud o puedan perjudicar su desarrollo intelectual o moral. Según la OIT, el régimen anterior de Maduro no había hecho pública la lista de los tipos específicos de trabajo considerados peligrosos. Los menores de 14 a 18 años no pueden trabajar sin el permiso de sus tutores legales, ni en ocupaciones prohibidas expresamente por la ley, y no pueden trabajar más de seis horas diarias o 30 horas por semana. Los menores de 18 años pueden trabajar solamente durante el horario normal.

Toda persona que emplee a un niño menor de ocho años puede ser sancionada con una pena de prisión suficiente para disuadir a los infractores. Los empleadores deben informar a las autoridades si emplean a un menor como trabajador doméstico. El régimen anterior no hizo cumplir eficazmente la ley.

No hubo información disponible para determinar si se impusieron sanciones a los empleadores infractores de la ley ni sobre el número de las sanciones. El régimen anterior siguió prestando servicios a niños vulnerables, entre ellos los niños que viven en la calle, los que trabajan y los que están expuestos al riesgo de trabajar. No hubo informes independientes sobre la eficacia de estos ni otros programas respaldados por el régimen anterior.

En su mayoría, los niños trabajadores estaban empleados en el sector agropecuario, como vendedores callejeros, en el servicio doméstico o en pequeñas o medianas empresas, generalmente familiares. Siguió habiendo denuncias aisladas de niños explotados en el servicio doméstico, la minería, la mendicidad forzosa y la explotación sexual comercial (véase la sección 6), muchos de los cuales podían ser víctimas de la trata de personas. Un estudio realizado por Cecodap reveló que los menores trabajadores constituían hasta un 45% del total de los trabajadores mineros.

Algunos médicos que participaron en el programa médico de Cuba en el extranjero mostraron indicios de trabajo forzoso. Estos indicios comprendían la retención de los documentos de viaje de los médicos y su pago; la restricción de circulación de los participantes; el uso de “acompañantes” para vigilar a los participantes fuera de su trabajo; la amenaza con revocar las licencias médicas; y la toma de represalias contra familiares mediante la imposición de sanciones penales, exilio y separación

familiar si los participantes abandonaban el programa o no regresaban a Cuba conforme a las directivas de los supervisores del gobierno. Las autoridades no investigaron las alegaciones de trabajo forzoso dentro del programa. Además, los médicos que abandonaron el programa informaron de que los “acompañantes” cubanos los coaccionaron para que adoctrinaran a la población para que apoyara el régimen anterior de Maduro y falsificaran registros para incrementar el número de personas asistidas.

d. Discriminación con respecto al empleo o la ocupación

De acuerdo con la constitución, ningún ciudadano puede ser discriminado en el empleo. La legislación prohíbe la discriminación por razones de edad, raza, sexo, condición social, credo, estado civil, afiliación sindical, opinión política, nacionalidad, discapacidad o cualquier condición que pueda utilizarse para menoscabar el principio de igualdad ante la ley. Ninguna ley prohíbe específicamente la discriminación laboral por motivos de orientación sexual o identidad de género o por ser portador del VIH y el sida. Los medios de comunicación y varias ONG, como PROVEA y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, informaron de que el régimen contaba con una capacidad muy limitada para atender las denuncias y hacer cumplir las leyes en algunos casos, mientras que en otros carecía de la voluntad política para resolver situaciones de discriminación activa por motivaciones políticas.

Las ONG informaron de que los empleados públicos enfrentaron discriminación por sus creencias o sus actividades políticas. Según Aula Abierta, 4.876 funcionarios públicos fueron despedidos por motivos políticos en 2018. Según PROVEA, en abril el SEBIN detuvo a dos empleados del Banco Central de Venezuela por participar en una reunión de trabajadores públicos con el presidente interino Guaidó.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El régimen anterior de Maduro aumentó el salario mínimo nacional, aunque se mantuvo por debajo del umbral de pobreza. Expertos en materia laboral indicaron que el carácter unilateral de la decisión contraviene al Convenio N.º 26 de la OIT, que exige al gobierno consultar con los empleadores y trabajadores antes de promulgar los incrementos salariales. Los legisladores señalaron que el decreto incumplía la ley dado que reemplazaba los convenios colectivos. Dirigentes de los sindicatos de los sectores del petróleo, la salud, las telecomunicaciones y la electricidad destacaron que el decreto de aumento salarial no comprendía ajustes

salariales para acompañar el ritmo de la hiperinflación y que, por ende, seguía siendo una medida insuficiente para costear la canasta básica de alimentos. También violó la ley al anular los convenios colectivos firmados previamente, incluidas las tablas de salarios que escalonaban los sueldos en función de la antigüedad y el pago por méritos.

El sindicato del sector industrial (CONINDUSTRIA) afirmó que de las 15.000 industrias que existían en 2000, solo 2.500 permanecían activas en junio.

La ley establece una semana laboral de 40 horas (35 horas para el turno nocturno). La ley estipula límites diferentes para los “trabajadores por turnos”, quienes no pueden trabajar más de un promedio de 42 horas semanales en un período de ocho semanas, con un límite anual de 100 horas extraordinarias. La dirección de las empresas no puede obligar a su personal a trabajar horas extraordinarias y los trabajadores tienen derecho a dos días libres consecutivos por semana. Las horas extraordinarias se pagan con un recargo del 50% si un inspector del trabajo lo aprueba anticipadamente y con un recargo del 100% en caso contrario. La ley establece que, tras haber trabajado un año completo con un empleador, un trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones remuneradas por año. Un trabajador tiene derecho a que se añada un día por cada año adicional de servicio, hasta alcanzar un máximo de 15 días más por año.

La ley estipula condiciones de trabajo seguras, higiénicas y adecuadas. En los lugares de trabajo “se debe prestar la protección a la salud y vida de los trabajadores contra las condiciones peligrosas del trabajo”. La ley obliga a los empleadores a pagar sumas específicas por los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, desde un monto equivalente al doble del jornal diario, por cada día de trabajo perdido, hasta varios años de salario por las lesiones permanentes. Los trabajadores pueden eximirse de situaciones que pongan en peligro su salud o su seguridad, sin por ello arriesgar su empleo. Las sanciones por violación de las leyes en materia de salarios, horas, seguridad y salud ocupacional no fueron suficientes para disuadir a los infractores.

La ley protege a todos los trabajadores, incluso los temporales, los ocasionales y los domésticos. Según se informó, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ha tomado algunas medidas para hacer cumplir las disposiciones relativas a las tasas del salario mínimo y el horario de trabajo en el sector formal, pero el 40% de la población trabajaba en el sector informal, donde generalmente no se hicieron cumplir las leyes ni las garantías laborales. El régimen anterior no hizo cumplir en el sector público las garantías legales de la seguridad. Según

PROVEA, aunque el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales exigió a muchas empresas privadas que corrigieran las condiciones de trabajo peligrosas, el régimen anterior no hizo cumplir esas normas de la misma manera en las empresas y entidades del Estado. No hubo información pública disponible con respecto al número de inspectores ni a la frecuencia de las inspecciones para hacer cumplir las leyes sobre salud y seguridad, salario mínimo y horario de trabajo. Los inspectores del Ministerio rara vez clausuraban lugares de trabajo peligrosos. No hubo información que permitiera determinar si las penas bastaban para disuadir a los infractores.

No se disponía públicamente de estadísticas oficiales sobre muertes y lesiones en el lugar de trabajo.